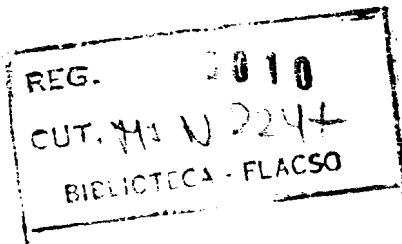


FLACSO - Biblioteca

La República Dominicana y Haití frente al futuro

SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA
1998

320
S^o 34 re



1998
Santo Domingo,
República Dominicana

La República Dominicana y Haití frente al futuro

Rubén Silié
Orlando Inoa
Arnold Antonin
Editores

Ediciones:
FLACSO-Programa República Dominicana

Diagramación: Mediabyte, S. A.
Impresión: Impresora Yan

INDICE

Presentación	i
Aspectos socio-históricos sobre la inmigración haitiana a la República Dominicana <i>Rubén Silié</i>	1
La República de Haití y la República Dominicana <i>Georges Brunet</i> <i>Kesner Pharel</i> Con la colaboración de: <i>Francisco Guerrero Prats</i>	33
Coordenadas coyunturales bajo el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana <i>Roberto Cassá</i>	73
Haití: Modernización política y democratización <i>Claude Moïse</i>	95
De la solidaridad a la cooperación institucionalizada <i>Kathy Magonès</i>	135
Medio ambiente en Haití y la República Dominicana <i>Rafael Emilio Yunén</i>	153
Los desafíos ecológicos en Haití hacia el año 2000 <i>Roberson Jonas Léger</i>	181

**COORDENADAS COYUNTURALES
BAJO EL GOBIERNO DEL PARTIDO
DE LA LIBERACION DOMINICANA**

Roberto Cassá

Un informe del proceso político reciente, como el que se pretende hacer en este documento respecto a la República Dominicana, tiene por primer requisito proveer elementos de juicio para el análisis. Conviene para ello establecer una prioridad en la definición de problemas, en vez de pretender llegar siempre a conclusiones. Sin embargo, por más que se procure dotar al documento de un sesgo exploratorio, resulta inevitable cierto grado de conclusiones personales.

Lo que a ojos de muchos es considerado como el mayor problema de la política dominicana en la actualidad estriba en la definición de las perspectivas que tiene la actual administración gubernamental de incorporar pautas novedosas en el funcionamiento del estado y el conjunto del sistema político, en la medida en que están insertos en una prolongada tradición autoritaria. Para tal fin, aparte de una ponderación de factores retrospectivas, en la medida en que la administración de Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana, tiene casi ocho meses, resulta obligado evaluar sus ejecutorias.

El foco de la exploración debe consistir en determinar en qué medida la salida de Joaquín Balaguer puede redundar en un sentido de democratización político y social, demanda de amplios sectores de la población.

La democratización constituye todavía una temática central en la medida en que el autoritarismo ha tenido manifestaciones sui generis, con componentes parciales o formales de los preceptos democráticos de Occidente, que le han conferido mayor capacidad de perpetuación, tal vez, principalmente, porque han generado resistencias menores que otros eventuales estilos. Le correspondió a Joaquín Balaguer basar los lineamientos de las especificidades de tal esquema de dominio, animado por los propósitos de su preeminencia personal sobre otros agentes sociales y políticos.

Por razón de edad, sobre todo, puede afirmarse, esta vez con casi total certeza, que la salida de Balaguer del poder ejecutivo es

un hecho irreversible, de sensibles consecuencias por las atribuciones extraordinarias que ejerció. Pero el peso del factor edad en el pronóstico es de por sí una señal acerca de los límites que encuentran hoy los propósitos de democratización del Estado y la sociedad.

El pronóstico de cambios se derive de la relevancia funcional que ha tenido el arte instrumental de Balaguer, que siempre ha conseguido conjugar conveniencias personales y grupales con elementos de la realidad que hacían innecesaria e inviable una dictadura abierta. Así, el poder de Balaguer pudo siempre reclamar un contenido democrático, en primer lugar por provenir de justas elecciones. De igual manera, en el decaimiento pasado, principalmente, pudo exhibir tolerancia hacia algunas de las libertades de la tradición occidental, siempre y cuando no interfirieran en la reproducción de Las relaciones sociales y en los planos neurálgicos de su poder personal.

Lo efectivo, empero, por encima de la observación formal de tales aperturas ha radicado en la veneración de los contenidos mínimos de la democracia, en aspectos como estos: las condiciones dudosas, para no decir abiertamente fraudulentas, en que se han desenvuelto los certámenes electorales, único evento que da cabida a la intervención de la población; la violación sistemática de la legislación existente siempre que ello convenga al poder; la hipercentralización de funciones gubernamentales en la figura del presidente de la República; la anulación de los restantes poderes del Estado; el ejercicio del peculado como instrumento nodal de dominio; y la aplicación de la represión, en la medida necesaria, para sofocar el ejercicio de la protesta y la disensión, cuando se estimaba que contravenían la estabilidad.

Es razonable suponer que al menos una parte de estos componentes del autoritarismo dominicano están puestos en cuestión a raíz del cambio de administración gubernamental. El vacío que deja Balaguer tiene innegables consecuencias en conjurar algunas de las prácticas más aberrantes del aparato Estado. Se tiene por delante la opción de una presencia social que se filtre por brechas nuevas del sistema político, puesto que la misma se presenta como una demanda ampliamente sentida. El Partido de la Liberación

Dominicana ha tenido un discurso concordante con lo que se presentan hoy como expectativas de la democratización. El país se encuentra en un momento en que se pueden producir redefiniciones.

Sin embargo, no puede esbozarse un pronóstico de en qué medida irá a producirse un avance democrático. Debe destacarse que, aunque el tiempo de la presente administración es aún reducido, pocos cambios sustantivos se han producido. Ya se tiene la experiencia de que las administraciones del Partido Revolucionario Dominicano, aunque acarrearón apertura de libertades, no se acompañaron por un cuestionamiento de los trazos esenciales del autoritarismo. Y actualmente no se registran señales de que las condiciones hayan experimentado variaciones decisivas, como para hacer de la democratización convencional una tendencia incontrastable.

En tal sentido, hay que considerar dos planos de dificultades para una democratización sustancial del sistema político y de la sociedad. El primero consiste en los requerimientos de la reproducción del sistema económico, permanentemente sujeta a precariedades que tornan las palancas del autoritarismo en auxiliares indispensables. No existen todavía medios de sustentación autónoma de una dinámica estructural que comporte la reproducción espontánea del sistema sobre bases económicas, como es propio de los países desarrollados, donde la burguesía se constituye en sólido agente de desarrollo.

Por otra parte, la atrofia político y cultural de la clase burguesa dominicana se ha tratado de compensar, en forma recurrente, con un protagonismo exagerado de las élites políticas y burocráticas. Este protagonismo, a su vez, ha desterrado la participación destacada de la burguesía en los asuntos públicos, a no ser en un sesgo fundamentalmente defensivo. En el desequilibrio resultante de la discrecionalidad de las élites políticos y burocráticas se halla, precisamente, uno de los orígenes de la persistente incidencia personal de Balaguer, cabeza, por herencia del trujillismo.

La globalización y sus corolarios librecambistas, lejos de corregir estos rasgos, presentan retos para los sectores económicos

dirigentes productivos, que por el momento carecen de medios para afrontarlos. Cabe considerar que, en cierta medida, en la actualidad se están incrementando las fragilidades de la formación de capitales. Se asiste a un retroceso de los aparatos productivos nacionales y parece que la economía está tendiendo a recomponerse, casi exclusivamente, alrededor de actividades terciarias, lo que plantea graves problemas en materia del crecimiento y sus calidades.

A los elementos estructurales descritos, se agrega el de naturaleza institucional, producto de la tradición autocrática que culminó en el trujillismo pero que se remonta a la fundación de la República, en 1844. Ante la imposibilidad de un proceso revolucionario en el futuro cercano, se hace en extremo difícil desmontar el cúmulo de prácticas institucionales vigentes.

Un segundo plano estriba en las condiciones particulares en que se produjo el ascenso del Partido de la Liberación Dominicana al gobierno. Es bien sabida la influencia limitada del PLD en las anteriores preferencias electorales, lo que quedó ratificado en las elecciones de 1994. A pesar de un significativo incremento de simpatías tras esas elecciones, correlativa al anuncio del retiro de Balaguer para las elecciones de 1996, el triunfo electoral en estas solo fue posible por el respaldo que le acordó Balaguer. El rápido incremento de las simpatías hacia el PLD paradójicamente provenía de porciones anteriormente partícipes en la polarización PRSC-PRD: para una parte de los antibalagueristas, ya el PRD dejaba de ser un vehículo obligado; y para muchos reformistas, la única forma de evitar el triunfo de los rivales era adheriéndose a la candidatura emergente. Todo ello se acompañó de un auge provocado por lo que se encontraba de novedoso en la candidatura de Fernández, fenómeno de distanciamiento frente a las dos opciones principales, que ampliaba, el conato de tal comportamiento, ya exhibido en las elecciones de 1990.

Por media de la reforma electoral auspiciada por el Pacto por la Democracia, en agosto de 1994, se eliminó la reelección presidencial sucesiva, circunstancia por la cual a Balaguer no le podía interesar (amén de ser imposible) el triunfo de su propio partido,

puesto que habría salido de circulación en el caso de quedar en la presidencia Jacinto Peynado. En el mismo sentido, un buen desempeño de la candidatura de Peynado, expresado en un segundo lugar que le permitiese ir a la segunda vuelta, hubiera dado lugar al triunfo seguro del Partido Revolucionario Dominicano, dada la mayoría antibalaguerista en la población. El PRD tenía las mayores posibilidades de triunfo y evitarlo constituía la segunda prioridad de Balaguer, habida cuenta de las persecuciones que sabía se desatarían por el ansia de vendetta tras las humillaciones a que sometió a los dirigentes de ese partido después de 1986.

A pesar de las condiciones desventajosas, Balaguer pudo mantener un margen de iniciativa, retroalimentado por los errores cometidos por la dirigencia del PRD. Esta capacidad de maniobra le permitió negociar con el PLD desde una posición de fuerza, e imponer los componentes que estimaba cruciales en el discurso de la alianza electoral, el Frente Patriótico Nacional (FPN). Leonel Fernández y el PLD, en aras de obtener a toda costa el triunfo, tuvieron que replantear toda la trayectoria de su partido al proclamar a “Los dos J. B.” como Los inspiradores de su programa de gobierno.

Si bien, incontrovertiblemente, el poder sería ejercido por Leonel Fernández, los términos en que se estructuró el FPN implicaban series obstáculos para aplicar un programa al margen de la voluntad de Balaguer. Evidentemente, el pacto conllevó compromisos, aun fuesen implícitos, de respeto a la influencia del Partido Reformista y la no investigación de los desafueros de sus dirigentes en posiciones de altos funcionarios.

El veto del PRSC tiene, por lo demás, un asidero patente: su posición preponderante en el Congreso por medio de la mayoría en el Senado. Con su estilo, Balaguer se encargó de ratificar esta capacidad de interferencia al proponer de inmediato al PRD un entendido de oposición conjunta.

En las condiciones descritas, lograr una gestión exitosa, con los requerimientos de innovación que conlleva, demanda una voluntad de ruptura. La política dominicana, desde hace tiempo,

está condicionada por una perversa adscripción a lo existente. Cualquier novedad implica la necesidad de: pactar con una pluralidad de agentes, cuyo equilibrio reproduce la condición necesaria para la perpetuación del sistema político.

En sentido inverso al requerimiento de transitar rumbos novedosos, la dirigencia peledeista hoy en el poder se ha compenetrado de una voluntad de continuidad, que es vista como garantía para la permanencia indefinida en el poder. En los años recientes, el acceso al poder se fue tornando un fin en sí, en lo fundamental apartado de los contenidos del programa del PLD. Como producto de esta perspectiva, el PLD ha terminado reproduciendo la asimilación, otrora tan denunciada por el respecto al PRD, de las prácticas introducidas por Balaguer.

Ese giro culmina una tendencia profunda en el seno de las organizaciones partidarias convencionales de desdibujamiento de los motivos de diferenciación ideológica. Ahora bien, mientras en el PRD el mimetismo fue solo parcial y referido a prácticas efectivas, en el PLD ha asumido una dimensión de identificación conceptual, tornado pieza clave de un replanteamiento hacia el futuro de la relación entre los distintos agentes del sistema político.

Puede inferirse que la atrofia partidaria, exacerbada por una acusada vocación, exclusivista, llevó a la cúpula del PLD a adoptar paulatinamente actitudes conservadoras. El protagonismo que tiende a presentarse en las élites políticas como fin en sí se hizo causa crucial de la práctica peledeista cuando abandonó posturas de izquierda. Y ha quedado claro que fue el propio Juan Bosch quien asumió esa pertinencia funcional, al proceder a la expulsión de quienes recusaron los giros que impuso.

Ahora bien, no puede afirmarse que la base del PLD se haya tornado globalmente conservadora. Como es propio de todo partido político numeroso, coexisten en su interior tendencias distintas, que no pueden ser aplastadas por el centralismo de las reglas estatutarias. Así, puede estimarse que amplias porciones de las bases peledeistas aspiran a recomponer, desde el poder, lo que entienden de rescatable de sus tradiciones partidarias. La dirigencia obtuvo consenso en la alianza con Balaguer sobre el supuesto de que sería el medio para poner en práctica el programa. De mane-

ra que, junta a Las dificultades arriba ponderada para una gestión democrática y progresiva, en el seno del partido muchos demandan que ese sea su contenido.

Todavía el gobierno cuenta con el favor de las expectativas favorables de opinión pública. Lo mismo es extensible a la base peledista, aunque se sabe la existencia de inconformidades, tanto derivadas de apetencias de posiciones como de la demanda de que se aplique un programa ajustado a los principios por tanto tiempo defendidos. En cualquier caso, en el futuro próximo la probable profundización de los sesgos sistémicos en la cúpula que rodeo al presidente de la República está llamada a generar dificultades en el interior del partido.

Empero, hay lugar a considerar reducidas las consecuencias de tal inconformidad. No cabe duda ciertamente, de la existencia de porciones valiosas en la militancia del PLD, al igual que en el PRD. Pero, al mismo tiempo, opera entre muchos el sentido del goce con el manejo del poder, propio de quienes lo han anhelado y, sorprendentemente, lo tienen ante sí. Esto incluye el arrastre de porciones indeterminables, hasta hoy posiblemente pequeñas, hacia los atractivos del peculado. En otro orden, la emergencia de una contestación potente está plagada de obstáculos por los mecanismos hipercentralizados que siempre han pautado el funcionamiento de ese partido. Más que nunca, en ausencia de la rectoría de Bosch, se están poniendo en evidencia las insuficiencias que tenía la proclamada excelencia de educación ideológica interna, que hacia reclamar a los dirigentes una superioridad absoluta de calidad moral e intelectual. Es sintomático que hasta hoy no se hayan levantado voces significativas crítica o llamados de precaución, con Las excepciones conocidas de Miguel Solano y la señora Pérez Gaviño.

El impulso de un sentido distinto, de un “nuevo camino”, requeriría la solución de los dilemas que presenta la aspiración de permanencia indefinida en el poder. Como es lógico, esta aspiración tiende a reproducir la adherencia de la comunidad peledista hacia su dirigencia y hacia la figure de Leonel Fernández. Pero la primacía que se concede a tal objetivo está conllevando la recurrencia a Las prácticas clientelistas tradicionales. El clientelismo

no solo ha atravesado en medida considerable el funcionamiento orgánico del PLD, sino que, como conjunto, este lo proyecta al conjunto de la sociedad. Más importante, por el momento, que los casos eventuales de venalidad individual, hay indicios de la existencia de una concepción entre funcionarios gubernamentales tendente a la creación de un "sector económico", con el fin de otorgar sustento a los planes de continuidad. Por otra parte, se han registrado operativos masivos de captación de lealtades en base a prebendas, perpetuando las prácticas de la anterior administración.

La ejecución de una nueva práctica político tiene por requisitos la probidad moral, o sea, el abandono de los estilos que han sido característicos del sistema político por obra de Balaguer. No hay ya eficiencia global posible al margen de tal pauta, dada la forma viciosa en que la corrupción ha impactado en la cosmovisión de la población y, principalmente, los estratos próximos a los asuntos públicos. Pero los estilos tradicionales también tienen sus rangos inmediatos de eficacia, a los cuales parece que tienden a inscribirse los dirigentes peledeístas. De tal forma, es de esperar que se presente cierto debate interno entre las opciones en torno a la aplicación de los principios o de los requisitos de la permanencia. En consecuencia, como conjunto, el PLD deberá escoger entre lineamientos forzosamente contradictorios, y al parecer en la práctica se registran actitudes divergentes en el gobierno.

Los primeros conatos de esta problemática se perciben en las iniciativas asumidas por algunos funcionarios del gobierno en contra de los anteriores incumbentes o en defensa de principales generados, lo que evidencia que el propio cuerpo burocrático no es homogéneo. El director del Instituto Agrario Dominicano, por ejemplo, se ha distinguido en la denuncia de las iniquidades cometidas por los reformistas al frente de esa dependencia gubernamental, resultando involucrados altos jerarcas en la apropiación ilegal de tierras de la reforma agraria. Incluye el anuncio de sometimiento a la justicia del senador de Pedernales y socios, en relación al affaire de apropiación de tierras del Parque Nacional Jaragua con pretexto de asentamiento agrario. Cabe asimismo destacar la probidad con que el fiscal del Distrito Nacional labora para que se conduzcan los asuntos judiciales, contribuyendo a la

instrumentalización del expediente relativo al asesinato de Orlando Martínez, de emblemática carga simbólico. Al margen de estas honestas actuaciones, es preciso reconocer que la sustitución de una porción mayoritaria de altos funcionarios tiene consecuencias innegables en un manejo menos deshonroso del conjunto del aparato estatal.

Ahora bien, no se trasluce una voluntad definida de profundizar tal efecto espontáneo derivado del cambio de gobierno. En lo que toca a las iniciativas específicas mencionadas, aunque el gobierno requiere la legitimidad que le abonan, parece que las mismas han sido producto de la heterogeneidad presente en su seno y que, de hecho, han trascendido las conveniencias de la cúpula, preocupada ante todo por mantener relaciones cordiales con los reformistas. Señal de ello fue la visita precipitada del presidente y del secretario de la Presidencia a Balaguer momentos antes de que comenzaran a ser detenidos los inculcados por el aludido crimen.

Esa prioridad explica medidas como el despido de Miguel Solano, tras su denuncia de irregularidades administrativas en la Presidencia. De la misma manera, es sintomática la destitución del anterior director del Instituto del Seguro Social, cuando enfrentaba prácticas mafiosas enquistadas en esa institución. Sin embargo, sería difícil desterrar totalmente las expectativas presentes en peledeístas y allegados sobre institucionalidad y honestidad. En sentido contrario, su satisfacción lesionaria las relaciones con el reformismo, lo que no solo toca el equilibrio mínima que requiere la gobernabilidad, sino los planes de integración de porciones importantes a un PLD reformulado y con vocación reeleccionista, como de hecho lo propone R. A. Font Bernard, seguramente el más connotado de los escasos intelectuales vinculados a aquella formación.

En cualquier escenario que se desarrollen las relaciones entre el PLD y el PRSC, el conflicto luce estar llamado a agudizarse paulatinamente, a pesar de los intentos en ambas partes para que esto no se produzca o tenga repercusiones limitadas. Hay que considerar que las buenas relaciones presuponen el respeto a la capacidad de veto de Balaguer; y que el distanciamiento plantea-

ría una voluntad de diferenciación que contrasta con el sentido conservador predominante en las esferas gobernantes.

El escenario presumible presagia el distanciamiento paulatino a causa de los intereses encontrados de cara a las próximas elecciones, que los reformistas quieren posponer y que son consideradas vitales por los peledeístas para la plena gobernabilidad.

Esto probablemente potencie, a su vez, la debilidad manifiesta de las relaciones del gobierno con la clase burguesa, la única que tiene en el presente recursos para incidir de manera decisiva en las ejecutorias gubernamentales. Balaguer usó frente a la burguesía una combinación de concesiones y de hegemonía, que administraba por medio de negociaciones por separado con los más ricos, con lo que inutilizaba cualesquiera anhelos de independencia y acción común respecto al estado. Situado Balaguer como benefactor histórico de la clase, esta le temía, lo que retroalimentaba su capacidad de iniciativa. No sucede lo mismo en la presente gestión.

El problema que se está evidenciando en la relación de Fernández con la burguesía se refiere a los contenidos de las políticas económica a ejecutar. El presidente ha dejado clara su compenetración con lo que se denomina comúnmente neoliberalismo, aunque se niegue a reconocerlo con tal apelativo. Tal vez el supuesto clave subyacente en su posición consista en que solo mediante la entrada de inversiones extranjeras masivas será posible un crecimiento que haga superar las condiciones del subdesarrollo por medio del incremento de las exportaciones. En el mundo de hoy, tal convicción lógicamente tiene por correlato una política de librecambio que descarta prácticas consuetudinarias. Como centro del programa potencial, se trata de conjugar el sentido conservador con un concepto de modernización que permita la integración a las corrientes económicas dominantes en los países latinoamericanos.

El núcleo de tales criterios, según se han podido expresar en iniciativas gubernamentales, se dirige a promover la apertura de la economía, erradicar los preceptos proteccionistas tradicionales, desregular la economía, minimizar el papel económico del Estado, desgravar al capital y hacer depender cada vez más los

ingresos estatales de impuestos indirectos a cargo de la masa de la población. El corolario de tal conjunto se resume en la priorización de la inversión extranjera y el logro de la competitividad a escala internacional.

Tal concepción, a pesar de no estar con exactitud expuesta, en todas sus partes, en documentos gubernamentales, se puso de manifiesto en ocasión de las propuestas de "reformas" que acompañaron la presentación de la Ley de Gastos Públicos de 1997. Ese paquete de medidas fue concebido por Andrés Dauhajre hijo, ejecutivo de la Fundación Economía y Desarrollo, un organismo apoyado por la fracción comercial del capital local y los organismos internacionales, con el fin de desbrozar los obstáculos de las anteriores regulaciones estatistas y proteccionistas. Dauhajre, sintomáticamente, fue aceptado como principal asesor de las estrategias económicas del gobierno, con la justificación de encontrarse al frente de una oficina local del Banco Mundial.

La orientación de tal programa se puso de manifiesto sobre todo en el propósito de reducir y unificar los aranceles hasta llegar a una tasa de 10% en dos años. De haberse adoptado tal lineamiento, se habría infligido un golpe demoledor a los sectores productivos del país. Adicionalmente, se intentó establecer regulares sosegadas a favor de la fracción comercial, como fue la propuesta de eliminación de la depreciación y los intereses como gastos deducibles para fines de cálculo del impuesto sobre la renta a cambio de la reducción de la tasa de ese impuesto a un 10%, tanto para personas como para empresas. En compensación por la disminución de los aranceles y de las tasas del impuesto sobre la renta, se proponía elevar el impuesto al consumo ITBIS hasta 15%.

De inmediato la cúpula industrial, agrupada en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), se pronunció en contra de dicho paquete. El gobierno tuvo que reconocer la imposibilidad de actuar en contra de las concepciones de los industriales. Retrospectivamente puede achacarse a la inexperiencia política el que no se previera la oposición que estaba llamada a generar la presentación de dichas medidas. De todas maneras, con premura se corrigió el rumbo y se acordó modificar estas iniciativas.

Los acuerdos entre empresarios y gobierno, al tiempo que acordaban mayores márgenes de recaudación, anulaban muchos aspectos del programa. En relación a los aranceles, se aceptó el criterio proteccionista, expresado en el mantenimiento de cinco tasas, entre 20 y 1.5%. También se anuló la eliminación de depreciación e intereses para el impuesto a la renta y, sorprendentemente, los industriales contribuyeron a que se mantuviera un criterio mínimo de progresividad en la tributación personal. Por igual, se negoció que se propusiera que el ITBIS fuese elevado solo a 11%, en vez de 15%.

En los acuerdos con la cúpula empresarial el gobierno tuvo que acoger el supuesto de que tendría que operar en las llamadas reformas con una gradualidad bastante más lenta que la concebida. Así se reconoce en los aprestos recientes de reintroducir los cambios en aranceles y en el ITBIS, después de varios meses de inercia.

Pero eso no significa que haya habido renuncia al programa fáctico gubernamental, puesto que es el que se desprende de los convencimientos del presidente. Más importante incluso es que se mantienen las condiciones, a escala internacional, favorables a la profundización de las reformas neoliberales, aunque la resistencia de la fracción todavía hegemónica del capital local coloca ciertos límites a sus posibilidades de aplicación. Claro está que tales capacidades de resistencia tienen un límite. La fracción industrial del capital tiene conciencia de que la pelea está perdida por obras de los poderes supranacionales, y que lo que le resta es ganar tiempo, evitando que la apertura se produzca de manera abrupta y así poder insertarse en los mecanismos comerciales y de otros servicios, como de hecho lo ha venido haciendo. Esta derrota anticipada de la fracción industrial ratifica la probable persistencia del gobierno en aplicar preceptos de los recetarios neoliberales, aunque con visión gradualista, con el fin de evitar derrotas como la sufrida a finales del año pasado.

Cabe considerar, adicionalmente, en la ponderación de las dificultades que confronta la aplicación del neoliberalismo, sus previsibles consecuencias en la eventual recomposición de la pro-

testa popular. No obstante, el movimiento popular todavía no sale de los errores cometidos en 1990 y 1991, lo que tendría por requisito la enunciación de criterios alternativos acordes con las circunstancias.

Aun con estos ingredientes políticos ambiguos, la disposición neoliberal del gobierno enfrenta como mayor problema su falta de concordancia con las peculiaridades de la economía dominicana, lo que permite augurar el fracaso irremediable de cualquier tentativa en tal dirección. Es patente que el Estado carece de los recursos técnicos necesarios para aprovechar, en una perspectiva de crecimiento, la apertura y las desregularizaciones, y para paliar sus efectos destructivos y de desigualdad social.

En cualquier caso, la recomposición de una capacidad técnica y administrativa de estado se presenta como un requisito de un desempeño económico adecuado. Ello, a su vez remite a la conexión indispensable con una reformulación integral de las bases de funcionamiento del sistema político.

Si los agentes del sistema político pretenden perpetuarse en base a los requerimientos de la legitimidad, principalmente quienes controlan el Ejecutivo, deberían abocarse a una reformas sustanciales del estado, las relaciones de este con la sociedad y sus mediaciones. Ha habido ciertamente algunas formulaciones en la oficina creada para tal efecto por la presente administración al igual que por otros funcionarios. Es el caso del proyecto de nueva ley electoral. Debe decirse, además, que es lógico que exista interés al respecto en porciones de los funcionarios. Empero, sea por intereses o por insuficiencias de criterios las propuestas hasta el presente adolecen de limitaciones manifiesta. Se remiten a aspectos puntuales, fundamentalmente dimensiones técnicas. No hay hasta ahora nada formulado que se asemeje a reformas sistemáticas en el estado y la sociedad. Una intención de este género tendría que dotarse de asidero constitucional, al tiempo que la promulgación de una nueva constitución dentro de tal perspectiva debería ser producto de una consulta ordenada y multifacética de la población. Parece que en los partidos mayoritarios existe consenso en cuanto a lo no conveniente que resultaría una reformulación de fondos de las bases del sistema político.

La carencia de atención a este requisito introduce la ineficiencia técnica y administrativa como una de las dimensiones que hasta ahora muestra el equipo peledeista. No solo no se aboca a reformulaciones globales, sino que la administración de las funciones consuetudinaria elude respuestas a deficiencia relativamente fáciles de corregir. No hay que estar penetrado de beligerancia opositora para que se concluya en la evaluación de nulidad de realizaciones e incluso de intenciones en áreas tan fundamentales como la salud, la educación y la agricultura.

Es correcto admitir que la herencia de Balaquer pesa como un fardo terrible sobre cualquier intento de recomposición del funcionamiento del aparato estatal. Pero, con más razón debe ser enfrentada, si es que se aspira a una redefinición de las bases de funcionamiento del Estado y la sociedad. En cualquier caso no ha habido explicaciones satisfactorias de parte de los incunventes de las carteras y líderes partidarios de cómo enfrentarán la situación. Hasta hoy se remiten a la superación de contextos coyuntuales. Por ejemplo, en los meses finales del año, para explicar la falta de iniciativas, aducían en privado que no contaban con un presupuesto propio. Ahora depositan todas las expectativas en el cambio de correlación de fuerza en el Congreso en las elecciones de mayo de 1998. Estos último luce casi como un reconocimiento anticipado de las razones que habrían impedido la aplicación del programa partidario.

Evidentemente, el deterioro de las funciones estatales demanda del concurso de capacidades diversas presentes en la sociedad, sea a títulos individuales, técnicos clasistas, partidarios, etc. El éxito de la gestión actual depende en buena medida de la apertura de un estado tradicionalmente segmentado de la sociedad. Fernández, sin embargo, ha decidido operar con un gabinete partidario o parapartidario, salvo escasas excepciones. Ha habido, además, selecciones inadecuadas, desde el ángulo intelectual, en carteras estratégicas. En gran medida, es lícito inferir que la designación de independientes para otras funciones se ha hecho desde la óptica presidencial de dar una idea de sumatoria equilibrada por razones particulares. La cerrazón ante la sociedad, derivada del exclusivismo peledeista, ha quedado por lo tanto articulada a las deficiencias intelectuales y técnico-administrativas.

La presentación del paquete tuvo otra derivación en lo tocante al monto del presupuesto en la discusión con el Congreso. Los senadores y diputados, movidos por consideraciones estrictamente partidistas, focalizaron la oposición en el tema del actual grupo gobernante, los congresistas se negaron a acceder a la demanda del Ejecutivo de que se hiciera depender la aprobación del presupuesto de las medidas económicas. Y, ante los conflictos patentes entre el capital industrial y el gobierno, la oposición congresional cobró beligerancia.

Por lo menos se sentó un saludable precedente democrático, por cuanto el Congreso reclamó debidamente su condición soberana en materia legislativa, aunque se conectase con una oposición teñida de irracionalidad. El esquema autoritario anclado en el centralismo del Ejecutivo reaccionó haciendo uso tendencioso de una cláusula constitucional relativa a la supuesta iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo en la presentación de la Ley de Gastos Públicos. El gobierno proclamó que había vencido el mecanismo de aprobación de un nuevo presupuesto, por lo que seguiría vigente el de 1996. Es significativo que las Cámaras hasta el momento acatasen tal pretensión, con lo que reconocen la preeminencia indebida del Ejecutivo y le permiten el manejo discrecional de los recursos públicos.

El saldo de este debate arroja un elemento preocupante para el futuro de la institucionalidad democrática. Igual resulta la respuesta de los congresistas, quienes simplemente se preparan para librar una oposición beligerante, centrada en la disposición de no dejar pasar iniciativas del Ejecutivo, actitud magnificada por la carencia de alternativas a las políticas gubernamentales que permita al Congreso desempeñar una función activa en la gestión estatal.

Precisamente, uno de los límites que se presentan a una posible democratización en el futuro próximo se halla en la mediocridad y la corruptela que minan la capacidad del Poder Legislativo. Los congresistas ahora pretenden ejercer prerrogativas que Balaquer no les toleraba, básicamente confines de beneficiarse grupalmente, soslayando cualesquiera acciones de dinamización del sistema político. Al igual que el Ejecutivo, de ser posible, acuden a subterfugios reñidos con la legalidad. La mayoría de ellos

desean anular las siguientes elecciones, con el fin de permanecer en sus puestos, ahora jugosamente retribuidos.

En su recuperación de los preceptos centralista, el Ejecutivo exhibe también sus dosis cruciales de irracionalidad, tratando de mantener el control de todo el aparato estatal, como se mostró a propósito de la discusión de la ley de los ayuntamientos, que concluyó con otra derrota del gobierno. Los congresistas lograron imponer el reconocimiento automático de un 4% de los ingresos totales para ser destinados a los ayuntamientos. Junto a las conveniencias de los incumbentes de posiciones en las diversas reparticiones del estado, están en juego los aprestos de los tres partidos para quedar en posiciones ventajosas y poder hacer uso de los recursos que acuerdan los controles de los aparatos públicos.

Para los partidos de oposición las perspectivas de las elecciones comportan varios problemas que se derivan del debilitamiento de sus liderazgos. La edad de Balaguer y la enfermedad de Peña Gómez presentan retos difíciles de solucionar a sus respectivas formaciones, al tiempo que alargan las posibilidades de recomposición del apoyo de que goza el PLD.

Hasta ahora el gobierno se ha beneficiado del hecho de no haberse constituido una corriente efectiva de oposición, sea por desconcierto en el PRD o los cálculos del PRSC. Actúa, asimismo, que ambas formaciones tienen que tomar nota de la actitud mayoritaria de la población, según muestran encuestas en principios confiables, que deposita expectativas en la capacidad de recomposición por parte del gobierno. Pero, seguramente en la mayoría, se trata de un voto de confianza sujeto a dudas. La contundente popularidad de Fernández en los días posteriores a su toma de posesión experimentó un sacudimiento cuando decretó el alza de salarios de los altos funcionarios del gobierno. Para porciones amplias de la población quedó evidenciada la ausencia de una vocación de diferenciación en el desempeño de las funciones públicas. El descontento cundió por el hecho de quedar fuera de los beneficios los pequeños empleados y los miembros de otros partidos y evidenciarse la negativa de acometer medidas generales como el alza de salarios privados, o hacer depender otras de que se aceptara el paquete de medidas tributarias. El gobierno ha tenido que maniobrar con medidas que tienen por propósito visible res-

catar la legitimidad, como fue la repatriación de unos quince mil nacionales haitianos en condición ilegal. Es de resaltar, de todas maneras, que a pesar de la ausencia de realizaciones efectivas, persista aún el estado mayoritario de opinión que beneficia al gobierno.

A la luz de sus relaciones con el gobierno y de la aludida popularidad de éste, a los dos partidos de oposición se les plantean dilemas: orientarse hacia planos de colaboración con el gobierno, luchar por fortalecerse independientemente profundizando sus plataformas diferenciadoras o, en sentido inverso, pactar un frente opositor de cara a las próximas elecciones. Es en el PRD donde la resolución de estos dilemas está llamada a tener mayores consecuencias hacia el futuro. En el PRSC se asiste a titubeos de porciones importantes en aras de mantener vigencia, sea explorando alternativas internas o conectándose con otras organizaciones. El PRD queda en condiciones menos desfavorecidas por el entorno presente, dado el menor influjo centralista de su líder. Vista la trayectoria de ese partido y las reservas democráticas y progresivas en sus filas, la resolución de sus dilemas contribuirá a definir ciertos contornos del futuro próximo.

En términos más directos, la posibilidad de que se logre aprovechar elementos favorables de la presente coyuntura para la democratización en buena medida depende, en lo inmediato, de que en el PRD se ejerza una oposición progresiva que contribuya a presionar al gobierno para que cumpla con demandas de la sociedad. Ahora bien, hay muchos obstáculos para que estos se produzcan, por cuanto el vacío que está dejando Peña Gómez implica la desaparición de mediaciones entre la masa y la dirigencia y entre las tendencias encontradas de opinión o de figuras connotadas. Existen contornos partidarios que permiten aseverar que, en ausencia de Peña Gómez, las cosas no serán igual, y que los sectores conservadores tienen mayores posibilidades de obtener preponderancia.

Esta correlación de fuerza se pone de manifiesto en la aparente popularidad entre círculos dirigenciales de la propuesta del ex-presidente Salvador Jorge Blanco, referente a que se produzca una alianza electoral con el PRSC en 1998. En tal caso hipotético, el prestigio del PRD sufriría un fuerte menoscabo y se frustrarían

las posibilidades de recomposiciones positivas en su seno. Al PLD le sería dado reivindicar su asociación exclusiva con un postulado progresista.

En los próximos tiempos se podrá calibrar al margen de incidencia de los sectores más conscientes del PRD. De todas maneras, no deja de ser elocuente la escasez de reacciones adversas, entre militantes y dirigentes, respecto a la referida propuesta. En la representación senatorial, bajo la conducción de Ramón Alburquerque, se observa una corriente favorable a la alianza con el PRSC.

Por el momento, parece que el debate conceptual está oscurecido por el de la sucesión de Peña Gómez en la candidatura presidencial, aunque los precandidatos, en ciertas maneras, han manifestado elementos de lo que representan en materia programática. Al igual que ocurre entre los distintos partidos, en el seno del PRD los aspirantes no se preocupan por establecer planos de diferenciación, sino más bien de cohesión; esto coincide con la tendencia al difuminamiento de las fronteras políticas e ideológicas entre las organizaciones del sistema. Más bien, la clave de las diferencias se vincula a cuestiones como la ética, lo que no deja de tener sus consecuencias. Pero este rodeo plantea que una las corrientes electorales más serias del PRD eluden definir propuestas que impliquen una renovación a fondo de las relaciones sociales y el sistema político.

El panorama hasta ahora trazado permite considerar las dificultades que tienen los agentes del sistema político para tornarse en instrumentos de cambio. Esto es importante en la medida en que, precisamente, uno de los rasgos del autoritarismo vigente estiba en la falta de mecanismos institucionalizados para la participación de la población. Pero, al margen incluso de la inexistencia de dichos mecanismos, tras 1991 se ha registrado una minimización de las fórmulas de resistencia de la masa popular a las ejecutorias estatales. La población ha depositado, aun sea con reservas, las posibilidades de mejoría en los resultados electorales, aunque hay que reconocer que, pese al recorte de diferenciaciones ideológicas, la sustitución de Balaguer tenía por sentido la asunción de un mínimo de intereses populares y de la democratización. A su vez, el desactivamiento de los movimientos popula-

res a escala nacional ha estado conectado a un proceso progresivo de descreimiento que trasciende al sistema político y abarca a toda forma de participación colectiva. Aquí están involucrados elementos de la concepción local de la cultura de la modernidad, que incluyen los procedimientos de las frustraciones que deparan las administraciones del PRD entre 1978 y 1986. De manera relevante parecen haberse perdido varios referentes normativos que anteriormente siguieron, de distintas maneras, las porciones más conscientes de la población dominicana.

De tal estado de ánimo se deriva la dificultad para que la incapacidad de los partidos sea compensada mediante la emergencia de prácticas alternativas surgidas del seno de la sociedad. Tal vez en esa dificultad es que radica la trama central de la problemática actual vista hacia el futuro: los partidos se muestran estáticos, y tal situación se retroalimenta en virtud de la parálisis en que se hallan los posibles medios de cohesión alternativos.

Se desprende que en el proceso futuro se presentarán conflictos resultantes de la creciente carencia de los partidos de recursos para dar respuesta a los problemas, sobre todo en función de las demandas provocadas por vacío que ya comienza a dejar el ejecutor por excelencia del dominio. Como es lógico, el sistema siempre tiene mecanismo a su alcance para reproducirse, sin que ello signifique que se aboque a la solución de problemas y mucho menos a transitar esfuerzos de democratización progresiva. De no haber un empeoramiento en la condición material de la gran mayoría, no tiene por qué producirse un resurgimiento de los movimientos populares. Y, sobre todo, sin un replanteamiento del fondo, de las propuestas y los procedimientos, es válido augurar que, de existir, tales movimientos populares no podrán lograr la acción institucionalizada de la masa acompañada de una concientización creciente. En la década de los ochenta ya quedó patente el carácter episódico de los movimientos populares, lo que generaba una limitación irremediable a su capacidad de torcer los rumbos escogidos por los sectores de poder.

En cualquier caso el país requiere una democratización sustantiva, que se exprese en la participación creciente de la población como medio de corregir las insuficiencias del sistema político. Las contradicciones provocadas por los esquemas neoliberales

demandan respuestas alternativas dotadas de solidez y responsabilidad, que emanen de dispositivos anclados en el pueblo. El trazado de un futuro demanda avances de la democratización política que trasciendan las rutinas del sistema político y que se aboquen a afrontar los mecanismos de injusticia que han servido de soporte al sistema.

Tales respuestas demandan cierto sentido de oportunidad, dada la circunstancias relativamente favorable en la actualidad para que se puedan emprender modificaciones de cierta importancia en las pautas de reproducción del sistema. De no producirse ello, tal vez volvería a esbozarse un interrogante parecido al que se produjo tras las experiencias de 1978 en adelante: si el fracaso, en este caso de la administración del Partido de la Liberación Dominicana para acometer cambios mínimos e imprescindibles no será extensivo al conjunto de agentes políticos en el país interesados en una democratización y no solo los participantes en el sistema. Y es que, a la luz de las cosmovisiones prevalecientes en la población, cabe ponderar hasta qué grado volverán a recomponerse las propuestas autoritarias expresas.